

La “era PT” y el golpe político: dilemas para los movimientos campesinos en Brasil*

**A “era PT” e o golpe político:
dilemas para os movimentos camponeses no Brasil**

**The “PT era” and the political coup:
dilemmas for peasant movements in Brazil**

*Lia Pinheiro Barbosa***

Resumen

El artículo analiza los dilemas para los movimientos campesinos en Brasil frente a las disyuntivas entre “gobiernos progresistas” y el ascenso al poder de las nuevas derechas autoritarias y fascistas. Para ello, se analiza el caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en dos escenarios de la historia política reciente. El primero en el marco de los gobiernos “progresistas”, caracterizado por una apertura del espacio público, en el campo de las políticas públicas, a los movimientos populares, aunque al mismo tiempo y de manera contradictoria, también al sector privado. El segundo escenario es el del ascenso, mediante un golpe de Estado parlamentario, de la derecha “tradicional” y de la “nueva derecha”, ésta de carácter fascista.

Palabras clave: cuestión agraria, movimientos sociales campesinos, golpe de Estado, Brasil, políticas públicas.

Resumo

O artigo analisa os dilemas enfrentados pelos movimentos camponeses no Brasil frente às disjuntivas entre “governos progressistas” e a ascensão ao poder das novas direitas autoritárias e fascistas. Para tanto, analisa o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

* Una versión de este artículo fue publicada en marzo de 2018 como Documento de Trabajo con el título: “Dilemmas of peasant social movements faced with the dichotomy between progressive governments and the rise of the new right in Latin America: the case of Brazil”, en *ERPI 2018 International Conference. Authoritarian Populism and the Rural World*, The Hague, Netherlands, International Institute of Social Studies (ISS), Conference Paper núm. 26.

** Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Docente del Programa de Posgrado en Sociología, Universidad Estatal de Ceará (UECE). Coordinadora del Grupo de Investigación Pensamiento Social y Epistemologías del Conocimiento en América Latina y el Caribe. Investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y de la ICS-Brasil. Correo electrónico: <lia.pbarbosa@gmail.com>.

(MST) em dois cenários da história política recente: o primeiro no marco dos governos “progressistas”, caracterizado por uma abertura do espaço público no campo das políticas públicas aos movimentos populares, mas ao mesmo tempo, e de maneira contraditória, também para o setor privado. O segundo cenário é o da ascensão, mediante um golpe de Estado parlamentar, da direita “tradicional” e da “nova direita”, esta de caráter fascista.

Palavras chave: questão agrária, movimentos sociais camponeses, golpe de Estado, Brasil, políticas públicas.

Abstract

The paper analyzes the dilemmas for peasant social movements in Brazil in the dichotomy between “progressive governments” and the emergence of the new authoritarian and fascist Rights to power. It analyzes the case of the Rural Landless Workers Movement (MST), under two scenarios of recent political history: 1) the “progressive” governments, characterized by an opening of the public policy arena to peoples’ movements, while at the same time, and in a contradictory way, also to the private sector, 2) the rise, through a parliamentary *coup d’Etat*, of the “traditional” Right and the “new” authoritarian and fascist Right.

Keywords: agrarian issue, peasant social movements, coup d’Etat, Brazil, public policy.

El siglo XXI inaugura un nuevo periodo en la disputa por la democracia y por proyectos societarios alternos. En la geopolítica regional, además de los gobiernos nacidos de procesos revolucionarios—Cuba, Nicaragua y Venezuela— el bloque político institucional de izquierda está conformado por el ascenso de los gobiernos progresistas elegidos democráticamente por el voto popular: Brasil en 2003; Bolivia en 2006; Chile en 2006; Ecuador en 2007; Argentina en 2007; Paraguay en 2008; Uruguay en 2010. La conformación de un bloque de izquierda institucional pareciera favorable a una refundación del Estado y al fortalecimiento de una hegemonía política regional frente al dominio imperialista de Estados Unidos.

No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto se consolidó una transformación profunda en los Estados nacionales latinoamericanos, en el sentido de romper con las oligarquías agrarias, con el carácter dependiente de la economía, de enfrentamiento de los patrones de acumulación del capital transnacional, todas ellas instancias estructurales que amenazan la soberanía, la democracia popular y los territorios de los pueblos del campo. Es decir, más allá de frenar la implementación de la política neoliberal, ¿fue posible establecer una refundación del Estado—en las formas estatales de transición e instauración de una nueva institucionalidad por medio de una reforma política radical— que fuese capaz de incorporar al germen democrático las demandas de las organizaciones, promoviendo de canales de participación política verdaderamente popular?

Las interrogantes surgen en un momento en que la coyuntura política de la región requiere una urgente y necesaria revisión crítica, con el propósito de identificar qué

factores fueron determinantes para que se desencadenara el regreso de las derechas y el ascenso de nuevas derechas de carácter autoritario y fascista. Asimismo, es necesario analizar los límites y los equívocos de la conciliación de clases –opción estratégica del ciclo progresista– y qué desafíos plantea a las organizaciones populares en el marco de la lucha de clases.

En el artículo planteo algunas consideraciones para el caso específico de Brasil, con el objetivo de problematizar lo que la experiencia política de los gobiernos de la izquierda progresista, representada por el Partido de los Trabajadores (PT), demuestra con respecto a los avances, rupturas, articulaciones, complementariedad y continuidades en el ejercicio de la democracia en perspectiva popular. Destaco los retos que enfrentan los movimientos sociales campesinos frente a las disyuntivas entre “gobiernos progresistas” y el surgimiento de las nuevas derechas en el poder. Para ello, analizo el caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que propone la Reforma Agraria Popular y la llamada Educación del Campo en tanto concepto teórico-epistémico y proyecto histórico en la disputa de un proyecto político alterno para el campo brasileño.

El análisis se basa en dos escenarios de la historia política reciente de Brasil: el primero, en el marco del gobierno “progresista”, caracterizado por una apertura del espacio público, en el ámbito de las políticas públicas, a los movimientos populares, aunque al mismo tiempo y de manera contradictoria, también al sector privado. El segundo escenario es el del ascenso de la derecha “tradicional” y de la “nueva derecha” en Brasil, ésta de carácter autoritario, que lleva a cabo una ofensiva contra los logros históricos de la clase trabajadora y del campesinado. Reflexiono sobre los logros y los reveses parciales del MST bajo el “gobierno amigo”, y cómo se enfrenta ahora a la derecha autoritaria, que literalmente ha cancelado presupuestos centrales para la Reforma Agraria Popular y la Educación del Campo.

Los fundamentos del análisis son resultado de una investigación de carácter teórico-empírico y documental realizada con anterioridad: el primero, a partir de la investigación titulada “Movimientos sociales, educación del campo y reformas educativas en la historia reciente de Brasil”,¹ que posibilitó una verificación cuidadosa de las plataformas de la política agraria y educativa –Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), Ministerio de Educación (MEC) e Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA)–, con el objetivo de identificar la reconfiguración de los programas que articulan

¹ Investigación realizada dentro del proyecto PAPIIT “Políticas, reformas y alternativas educativas en la historia reciente de México en el contexto latinoamericano: tensiones y formas de articulación”, desarrollado entre 2014 y 2016 por el Programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina y financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.

la política agraria y la política nacional de Educación del Campo durante los gobiernos del PT y a partir del golpe político. Las notas de campo incorporan observaciones realizadas en el marco de actividades políticas del MST.² La investigación documental se basa en el análisis de Leyes y Proyectos de Leyes del periodo analizado, documentos producidos por el MST, además de notas periodísticas.

34 años de resistencia campesina y popular

En 2017 el MST celebra 34 años de lucha, consagrándose como un movimiento social orgánico de alcance nacional, heredero de la lucha histórica por el derecho a la tierra y al territorio, pauta reivindicatoria permanente del campesinado y de los pueblos originarios de Brasil. A lo largo de su trayectoria política, el MST logró establecer puentes de diálogo con América Latina y el Caribe, proceso que le permitió, por ejemplo, vincularse a La Vía Campesina Internacional (LVC) –principal organización de articulación de los movimientos sociales campesinos e indígenas a escala global– y a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) –instancia representativa regional de la LVC.

En Brasil, el MST ha creado espacios de diálogo con otras organizaciones populares rurales y urbanas, sindicatos y partidos políticos de izquierda. La realización de los Congresos Nacionales del MST ha contribuido a la paulatina construcción de una agenda política con el propósito de promover un debate más amplio con respecto a la Reforma Agraria y a la construcción de un Proyecto Popular para Brasil. En el VI Congreso Nacional, bajo la consigna “¡Luchar, construir Reforma Agraria Popular!”, el MST presentó su Programa Agrario, con la advertencia de que:

Su implementación no depende de reivindicaciones a gobiernos, o tan sólo de voluntad política de nuestro movimiento. Su materialización depende de la lucha de clases, de nuestra capacidad de ir acumulando fuerzas y de construir, en la práctica, en áreas conquistadas: asentamientos, escuelas, centros de capacitación, etc. Depende de nuestra capacidad de construir alianzas alrededor del programa con los otros sectores del campesinado y con toda la clase trabajadora urbana. Depende de la capacidad de amplios sectores de la sociedad brasileña para construir una hegemonía –una mayoría– que comprenda y defienda ese programa (MST, 2013:13).³

Los Fundamentos del Programa Agrario del MST (2014) articulan un conjunto de ocho objetivos: 1) democratizar el acceso a la tierra; 2) garantizar el uso sustentable

² Destaco el VI Congreso Nacional del MST (2014), el II Encuentro Nacional de Educadores y Educadoras de la Reforma Agraria (2015), el III Encuentro Nacional de Profesores Universitarios con el MST (2016), así como otros espacios de debate teórico-político del MST en los cuales he tenido oportunidad de participar.

³ Traducción propia.

de los recursos naturales; 3) preservar las semillas criollas como patrimonio de los pueblos para contribuir a la soberanía nacional; 4) garantizar un modelo de producción agrario destinado a la alimentación y la soberanía alimentaria; 5) producir y utilizar energías renovables; 6) asegurar el derecho a la educación pública y a la permanente elevación cultural de los pueblos del campo; 7) defender los derechos de la clase trabajadora, y 8) defender el campo como espacio de vida digna. Estos objetivos son resultado de la construcción histórica del MST en su aprendizaje al lado de la resistencia campesina brasileña e internacional.

El debate en torno a la Reforma Agraria Popular se da en el marco de la profundización de las contradicciones resultantes de la implementación del recetario neoliberal y de la transnacionalización del capital en la región. En ese escenario se observa la emergencia de un nuevo ciclo de protesta social, conformado por organizaciones populares y movimientos sociales urbanos y rurales que recuperan la crítica social de la política neoliberal y advierten sobre las consecuencias de la naturaleza histórica del capitalismo dependiente latinoamericano, en especial para las poblaciones indígenas y campesinas. En sintonía con la tendencia regional, el MST ha considerado como un eje central de su lucha la articulación de un bloque democrático-popular y de una plataforma política con el objetivo de disputar la hegemonía al interior del Estado, en el horizonte político de Gramsci, es decir, de erigir un proyecto democrático popular en la perspectiva del Estado Ampliado, de construir y fortalecer una dirección política por medio del consenso entre sociedad política y sociedad civil.

En el contexto brasileño, la victoria electoral del PT en el 2003 representó, para el conjunto de las organizaciones de base, la materialización de un proyecto político democrático-popular capaz de frenar el proyecto neoliberal. Expresó la confianza en la conformación de un gobierno con identidad de clase, condición favorable a la apertura de canales de diálogo con la sociedad civil, en especial en el campo de políticas públicas que garantizaran la satisfacción de derechos (Barbosa, 2016b).

Sin duda, la elección de un gobierno popular brindaba una atmósfera política esperanzadora frente a treinta años de dictadura militar y la coyuntura política neoliberal de desmantelamiento del Estado. En realidad, la fundación del PT durante la década de los ochenta, como partido de base popular, constituyó un referente para el fortalecimiento de un bloque histórico-político preexistente, con un proyecto de izquierda popular pensado y construido en la clandestinidad, en el cúmulo de la lucha en pro de la apertura democrática en Brasil y en la reivindicación de los derechos civiles y políticos conculcados durante la dictadura militar.

La Asamblea Nacional Constituyente (1987-1988) y la nueva Constitución de 1988 significaron una conquista del campo popular, en el sentido de plasmar en la Carta Magna los derechos y demandas políticos reivindicados en la Constituyente, entre

ellos, el regreso de la regulación del Estado con respecto a la política nacional. La ruptura con la lógica neoliberal del Estado mínimo era un anhelo político común a los países de América Latina, cuyo ápice se enuncia con el giro político latinoamericano hacia gobiernos de izquierda iniciado con la elección de Hugo Chávez en Venezuela. Para el MST, la elección de Luiz Inácio Lula da Silva (2003) representaba la oportunidad histórica de construir una agenda nacional donde la Reforma Agraria fuera una prioridad del gobierno, además de abrir camino a políticas públicas dirigidas al fortalecimiento sociocultural y productivo de los asentamientos de Reforma Agraria.

Ahora bien, luego de casi 14 años de gobiernos del PT,⁴ ¿hasta qué punto se podría afirmar que “valió la espera”⁵ para el bloque popular o para el conjunto de los movimientos sociales del campo? ¿Cuáles avances, rupturas, articulaciones y desafíos podemos identificar en el marco de un gobierno que es considerado un aliado, en especial para los movimientos campesinos? Sin la pretensión de agotar la reflexión –demasiado compleja– presentaré algunos elementos para el debate y para delinear las disyuntivas ante el actual escenario político brasileño.

La “era pt”: avances y desafíos para los movimientos campesinos en Brasil

El ascenso del PT representó la esperanza en la ampliación de la dimensión pública del Estado en tres esferas: la consolidación de una democracia popular, la realización de una reforma política, y la implementación de políticas públicas que incidieran en los niveles de exclusión social. Con respecto a la primera etapa de la gestión del PT, bajo los dos mandatos de Lula, fueron perceptibles los cambios en los niveles de vida de los grupos más vulnerables. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las medidas sociales implementadas por el PT, como el Programa Beca Familia, lograron sacar de la pobreza a 40 millones de brasileños. Los datos del *Panorama Social de América Latina* de la CEPAL (2013) apuntan que en el periodo de 2005 a 2011 hubo una reducción de 10.7 por ciento a 6.1 por ciento de la extrema pobreza y una disminución de 36.4 por ciento a 20.9 por ciento de la pobreza.

Es menester enmarcar estos datos en el contexto más amplio de la economía internacional para identificar, con precisión, los factores que influyeron en la naturaleza del proyecto neodesarrollista adoptado por el PT y los desafíos que plantean a las luchas sociales en Brasil en el contexto del golpe político. En las próximas secciones

⁴ De 2003 hasta abril de 2016, cuando entra en curso el golpe político.

⁵ “Brilha uma estrela” era la canción de la candidatura de Lula. En la composición existía la siguiente frase: “Lula lá, valeu a espera. Lula lá, meu primeiro voto, para fazer brilhar nossa estrela”.

destaco dos factores centrales: primero, la tendencia económica internacional en el periodo de ascenso del PT, y segundo, de carácter interno, el perfil de los grupos que se consolidaron en tanto fuerza histórico-política en la “era PT” y su capacidad de intervención en la correlación de fuerzas del periodo. En ese sentido, es emblemático el fortalecimiento de la bancada parlamentaria de extracción rural, de carácter pluripartidista, vinculada al agronegocio y con significativa influencia en los marcos regulatorios de la política agraria. Se trata de un paulatino robustecimiento de la burguesía agraria y que cobra particular relevancia con respecto a la cuestión agraria brasileña y los desafíos planteados al campesinado nacional.

El capital financiero internacional y la política económica en la “era PT”

En la década iniciada en el año 2000, observamos la inserción de los países emergentes en el proceso de financiarización económica, caracterizado por una mayor intervención de los mercados y de las instituciones financieras en las políticas económicas nacionales (Palley, 2007). Asimismo, se observa en ese periodo un impacto positivo en los indicadores económicos, resultado de la tendencia del mercado global de las *commodities*, lo que permitió un desarrollo económico con distribución de la renta, el incremento de subsidios para la inversión social en educación y salud, y el aumento del salario mínimo. Según Lavinás *et al.* (2017), el periodo 1995-2015 imprimió nuevas características institucionales y macroeconómicas a la economía monetaria, destacándose la financiarización en masa, la bancarización e inclusión financiera vía crédito al consumo, lo que provocó alteraciones importantes en la distribución del gasto social del gobierno central en su forma monetaria. En Brasil, el Programa Beca Familia y el aumento al salario mínimo permitieron un significativo grado de monetarización de los grupos sociales más vulnerables (Lavinás, 2013) y su incorporación al mercado por la vía del consumo, pero sin que se superara la heterogeneidad estructural aún característica del mercado laboral brasileño.

Podemos observar la existencia de una dialéctica expansión-contracción de la política económica en la “era PT”. La inclusión financiera y la bancarización de los sectores más populares generaron varios beneficios al modelo económico adoptado: primero, se reduce la necesidad de gasto social por parte del Estado, debido a que los individuos subvencionan sus propios servicios y consumo por medio del endeudamiento, por lo tanto, no se da un aumento de la inversión en el presupuesto público. Como ejemplo tenemos el endeudamiento por crédito al consumo destinado a financiar necesidades no atendidas por políticas sociales para la obtención de bienes y servicios. Y segundo, es parte de la financiarización más generalizada, en el sentido que abre nuevos mercados con nuevos clientes, donde el sector financiero puede lucrar con los intereses que cobran los bancos por las deudas adquiridas. Así, en esta nueva etapa de acumulación hay una complementariedad entre la naturaleza de las políticas sociales

impulsadas por los países emergentes y la política económica basada en la financiarización de la economía.⁶

Otro aspecto a ser considerado en ese periodo lo constituye la conformación del bloque de países conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que permitió a Brasil ascender a una posición estratégica en la geopolítica internacional. Asimismo, la cooperación internacional favoreció el incremento del capital transnacional, sobre todo en los acuerdos de cooperación bilateral establecidos con China, fundamentalmente en el campo de la extracción mineral. En Brasil, la profundización del modelo de apropiación territorial por empresas mineras chinas sigue la tendencia internacional de la acumulación por desposesión (Harvey, 2004) inaugurada con las políticas neoliberales, la cual proporcionó al capital minero transnacional el acceso casi irrestricto a las regiones ricas en mineral, en especial en América Latina.

Es innegable que el periodo de estabilidad económica a escala internacional propició el crecimiento económico interno de Brasil e incluso su proyección en tanto potencia económica regional. Si regionalmente Brasil se perfilaba como una economía en crecimiento, internamente era necesario que el PT garantizara un ambiente equilibrado entre las fuerzas políticas, con el fin de mantener esa posición estratégica mientras se mantuviera la tendencia económica favorable.

En este sentido, Avritzer (2016) argumenta que en la “era PT” se conformó el *presidencialismo por coalición*, es decir, un pacto por la gobernabilidad, condición necesaria para una ampliación de la participación política del bloque democrático-popular, sobre todo en lo que se refiere a la satisfacción de derechos. En consonancia con ese análisis, Singer (2012) destaca que las políticas sociales y de distribución de la renta del primer gobierno de Lula (2003-2006) despertaron la atención de las fuerzas de oposición ante la nueva agenda política que se abría en ese periodo. Singer argumenta que era inminente el riesgo de una radicalización en favor de una plataforma política popular, lo que suscitó lo que él llama el “lulismo”, es decir, un pacto conservador dentro del orden, con el espíritu de conciliación y de alianzas políticas favorables al capital transnacional. Según Singer, la Carta al Pueblo Brasileño evidenció este pacto conservador y un realineamiento ideológico del PT, alejándolo de los intereses de clase auspiciados por el bloque democrático-popular. Singer desta-

⁶ La bancarización de las economías de los países emergentes del sur global ha sido amplia y estratégicamente impulsada por el Banco Mundial bajo el discurso del combate a la pobreza y el empoderamiento económico de las mujeres. La política económica conducida por el PT seguía los dictámenes del Banco Mundial. Y si bien hubo un incremento de 80 por ciento en el salario mínimo entre 2001 y 2015, 48 por ciento de ese ingreso fue destinado al pago de deudas (Banco Mundial, s/f).

ca que la existencia del pacto siempre ha expresado la inminencia del conflicto, dado que la lucha de clases no ha cesado. En virtud de ello, se adoptó como estrategia un pacto político –conciliación de clases– para proyectar una aparente armonía en el campo institucional y de la gobernabilidad.

En perspectiva latinoamericana, Machado y Zibechi (2017) consideran que en el ciclo progresista, el proyecto de la izquierda no priorizó una redistribución radical de la riqueza, y mostró su incapacidad para enfrentar al capitalismo. Dichos autores señalan que entre los componentes estratégicos de ese ciclo hay dos que fueron centrales: por un lado, la superación del modelo económico neoliberal con políticas de fuerte impacto simbólico en el imaginario social, y por otro, la deslegitimación de los actores políticos del periodo neoliberal, en términos de la partidocracia, pero sin afectar a los agentes del mercado y su matriz económica de acumulación. Incluso, Zibechi (2010) considera que las políticas de combate a la pobreza en América Latina, entre ellas el Programa Hambre Cero, constituyeron políticas de contrainsurgencia, ya que su implementación se dio en un contexto de promoción de una profunda desmovilización social.

Si bien la conciliación de clases es un rasgo de la “era PT”, hay que reconocer que la presión ejercida por la base popular dio paso a algunas reformas para el reconocimiento de derechos, sobre todo en el marco regulatorio de la política educativa. Un ejemplo importante en el ámbito de la política agraria lo constituye la creación del Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA) y el conjunto de los marcos regulatorios de la Política Nacional de Educación del Campo, ambos conquistados por los movimientos sociales campesinos, en especial el MST. Es necesario destacar que se trata de conquistas alcanzadas gracias a la capacidad de presión política de los movimientos sociales y de las organizaciones populares, y no de una concesión del Estado en atención a acuerdos preestablecidos con la base popular.

La disputa de proyectos políticos en el campo brasileño

Veamos de qué forma ha sido abordado a lo largo de la “era PT” el proyecto político de la Reforma Agraria Popular, eje medular de la demanda histórica del campesinado brasileño. Durante ese periodo, se perfiló la disputa de dos proyectos políticos en el campo brasileño (Barbosa, 2016b): por un lado, el MST y la LVC de Brasil debatían la centralidad social, política y económica del proyecto de la Reforma Agraria Popular, y por el otro, la burguesía agraria fortalecía el control de la base material del capitalismo agrario brasileño por la vía del agronegocio. Al final del proceso electoral de 2014 la configuración parlamentaria expresaba la hegemonía política de la burguesía agraria: de los 191 diputados del Frente Parlamentario de la Agropecuaria (FPA), 139 fueron reelegidos, es decir 72 por ciento.

Estos números no pueden ser analizados de forma dissociada de sus implicaciones en la correlación de fuerzas en la “era PT”. El agronegocio brasileño conquista una posición sobresaliente a escala nacional e internacional, reafirmando su carácter hegemónico en el ámbito de la política agraria. De acuerdo a datos de la Confederación de la Agricultura y Pecuaria de Brasil, la actividad agropecuaria representa 23 por ciento del Producto Interno Bruto, y en 2013 fue responsable por el 41 por ciento de las exportaciones del país.⁷ El FPA tiene la suficiente fuerza política como para proponer nombres para el Ministerio de Agricultura, además de los presidentes de las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria del Senado, un poder de incidencia política que ha sido ejercido en el periodo reciente (Barbosa, 2016b). En su primera gestión, Lula no cumplió la promesa de llevar a cabo una Reforma Agraria de carácter popular. Más bien hubo un aumento en la inversión del capital financiero internacional en el agronegocio. En su segundo mandato, se estableció una alianza estratégica con el agronegocio, al implementar una política agraria favorable a la utilización de semillas transgénicas y al monocultivo de la soya.

Es menester destacar la disputa en torno al desarrollo territorial rural en Brasil y su expresión en el ámbito de las políticas públicas llevadas a cabo por el paradigma de la cuestión agraria y el paradigma del capitalismo agrario. De acuerdo a Fernandes Mançano (2008), el paradigma de la cuestión agraria asume como premisa que la problemática agraria es parte estructural del capitalismo y la lucha de clases constituye el marco interpretativo de las disputas territoriales y de los modelos de desarrollo para el campo. Ese paradigma plantea dos tendencias: la proletaria, basada en las relaciones capital-trabajo y que asume el fin del campesinado como una consecuencia inevitable de la territorialización del capital en el campo, y la campesina, basada en preservar las relaciones sociales campesinas y que enarbola la defensa del territorio luchando contra los proyectos de capital. Por su parte, el paradigma del capitalismo agrario plantea que las desigualdades generadas por las relaciones capitalistas son un problema coyuntural y pueden ser superadas con políticas públicas que posibiliten la integración del agricultor familiar o del campesinado al mercado capitalista. Asimismo, este paradigma presenta dos tendencias: la agricultura familiar integrada al capital, y la del agronegocio, que considera a la agricultura familiar como algo residual en el capitalismo agrario.

Fernandes Mançano (2015) sostiene que el debate político en torno a los paradigmas de desarrollo territorial rural definirá la naturaleza de las políticas públicas implemen-

⁷ La influencia del sector igualmente se expresó en las donaciones durante las campañas electorales de 2014. Grandes corporaciones como la Copersucar, Cutrale, Cosan y la JBS, una de las líderes en el procesamiento de carnes, están entre las principales donantes para las campañas de Dilma Rousseff (PT) y de Aécio Neves (PSDB).

tadas, ya sea como “políticas públicas emancipatorias” o como “políticas públicas de subordinación”. Las primeras serán aquellas articuladas por el paradigma de la cuestión agraria y son resultado de reivindicaciones de la base popular con capacidad de disputar el espacio público e incidir en la propuesta, elaboración y ejecución de políticas públicas que atiendan las demandas de la base. En cambio, las políticas públicas de subordinación están ancladas en el paradigma del capitalismo agrario y, por lo tanto, fortalecen el modelo de desarrollo del agronegocio, con la subordinación de las comunidades campesinas a este modelo.

Durante los gobiernos del PT se dio una permanente disputa entre los paradigmas de desarrollo territorial. La estrategia política de conciliación de clases permitió que el fomento de políticas públicas agrarias pasara a un terreno en que, simultáneamente, eran atendidos algunos aspectos de los dos paradigmas en disputa.

Identificamos avances significativos de los movimientos sociales campesinos en la conquista de políticas públicas en la perspectiva del paradigma de la cuestión agraria. La Educación del Campo constituye el principal ejemplo del debate teórico, epistémico y político, y de las mediaciones con relación a la reivindicación de políticas públicas para la democratización del acceso a la educación de la población rural en Brasil (Barbosa, 2013). La Educación del Campo abrió camino a la creación del PRONERA y de la Política Nacional de Educación del Campo, resultado de un movimiento histórico de disputa de un proyecto educativo para la atención de la demanda educativa, en el marco de la Política Nacional de Educación, desde la educación básica hasta la universitaria (Barbosa, 2015; 2016a).

En diálogo con el análisis de Fernandes Mançano (2015), el PRONERA y la Política Nacional de Educación del Campo configuran ejemplos de *políticas públicas emancipatorias*, toda vez que son fruto de la capacidad de articulación política de los movimientos sociales del campo para proponer políticas públicas específicas. De igual manera, refundan las dimensiones legal y jurídica en el abordaje de la política educativa, en consonancia con los fundamentos del paradigma de la cuestión agraria. De ahí que la Educación del Campo no se limita a un debate conceptual o pedagógico, sino más bien trata de instaurar un proceso de regulación y control social de las políticas públicas en Brasil por parte de los movimientos sociales campesinos, de decidir bajo qué conceptos y términos jurídicos debe ser elaborada una política pública.

El PRONERA fue sometido a dos evaluaciones con el fin de identificar su alcance nacional: la I Evaluación Nacional sobre la Educación en la Reforma Agraria (IPNERA),⁸ entre

⁸ Utilizo la sigla en portugués de la I Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária.

2004 y 2005, y la II Evaluación Nacional... (IIPNERA), entre 1998 y 2011.⁹ La IPNERA incluyó a escuelas del campo en el Censo Escolar del Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a partir de 2005. Según datos de la IIPNERA, hasta 2011 el PRONERA había promovido en 880 municipios brasileños la realización de 320 cursos en la modalidad de educación para jóvenes y adultos, educación básica y educación superior, involucrando 82 instituciones de enseñanza, 38 organizaciones solicitantes de cursos y 244 instituciones sociales, con la participación de 164 mil 894 educandos (IPEA, 2015). Con respecto al acceso a la educación superior, la IIPNERA presenta los siguientes datos: 42 cursos de licenciatura (11.6 por ciento), y 12 de posgrado, referentes a especialización y maestría (2.4 por ciento), desarrollados por 62 universidades públicas brasileñas. El PRONERA y la Política Nacional de Educación del Campo han permitido el avance en la educación de los campesinos, una conquista que no es menor ante la histórica negación del derecho a la educación y los niveles de analfabetismo, notoriamente en las zonas rurales, problemática estructural en Brasil.

Si bien el PRONERA y la Política Nacional de Educación del Campo enmarcan la disputa de políticas públicas desde la perspectiva del paradigma de la cuestión agraria, en el movimiento pendular propio de la lógica de la conciliación de clases, es posible identificar otros procesos políticos que favorecieron el paradigma del capitalismo agrario en el mismo periodo. En 2003, el II Plan Nacional de Reforma Agraria tenía por meta asentar a 500 mil familias. Sin embargo, los datos sistematizados del INCRA, difundidos por el Instituto Socioambiental (2016), evidencian una reducción drástica de tierras para la reforma agraria: en la primera y en la segunda gestión de Lula hubo 381.4 mil y 232.6 mil familias asentadas, respectivamente; mientras que en el gobierno de Dilma Rousseff sólo fueron asentadas 133.6 mil familias.

Según datos de Oliveira (2001), durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 373 mil 210 familias fueron asentadas en 3 mil 505 asentamientos rurales, entre ellos, aquellos resultantes de regularizaciones agrarias, comunidades quilombolas,¹⁰ asentamientos extractivistas y de proyectos de reforma agraria. La ampliación de los asentamientos en ese periodo fue resultado directo de la presión que ejerció la ocupación de tierras por parte del MST, lo que demuestra que la Reforma

⁹ La PNERA estuvo a cargo del INCRA, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y de la Cátedra Unesco de Educación del Campo y Desarrollo Territorial, de la Universidad Estatal Paulista (UNESP).

¹⁰ Los quilombolas son descendientes de africanos esclavizados en Brasil. La terminología viene de *quilombo* –de origen *kilombo* u *ochilombo*, lengua bantú de Angola–, lugar de refugio de los esclavos que lograban huir de las haciendas. Las comunidades quilombolas buscan mantener sus tradiciones culturales y su ancestralidad, y reivindican frente al INCRA el reconocimiento de los territorios quilombolas.

Agraria antes de ser una política gubernamental es fruto de la presión social del campesinado.

Pese al histórico apoyo político de la Comisión Pastoral de la Tierra y del MST al Partido de los Trabajadores, se constata paradójicamente que en la política de reordenamiento territorial hay una tendencia general a disminuir de manera significativa áreas de interés colectivo y de tierras para la Reforma Agraria, además de que se intensifica la concentración de tierras. De acuerdo con el Censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2010 había más de 69 mil latifundios improductivos en Brasil que controlaban 228 millones de hectáreas de tierra (IBGE, 2010). Es notorio que la Reforma Agraria no es un tema prioritario en la agenda política del gobierno. A propósito de ello, Alexandre Conceição, de la Coordinación Nacional del MST, destaca:

Tuvimos cuatro años insignificantes. El gobierno de Dilma optó por organizar los asentamientos existentes en lugar de asentar a las familias que aún necesitan [de asentamientos]. Al hacer eso, el ritmo de asentamientos disminuyó. Esta política fue equivocada. Los números son decepcionantes, sobre todo en virtud del apoyo que siempre hemos dado al PT. El gobierno de Dilma fue peor que el de Fernando Henrique Cardoso (Prazeres, 2015).¹¹

En la "era PT" se priorizó una política de asentamientos en lugar de Reforma Agraria. No obstante, algunos programas fueron implementados, como el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) y el Programa de Adquisición de Alimentos. Sin embargo, hay que destacar que, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, el INCRA sufrió una reestructuración institucional con el fin de descentralizar todo lo relacionado con la política agraria. Entre las implicaciones de esa reestructuración interna, Pinassi y Firmino (2013) destacan que:

Os investimentos na melhoria de vias de acesso ao mercado pelos assentados para o escoamento da produção passará a ser de responsabilidade dos municípios, que deverão receber os recursos do governo federal por meio do PAC-Equipamentos. A construção de casas nos lotes se dará por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, a cargo do Ministério das Cidades, assim como o fornecimento de luz, que virá por meio do programa Luz para Todos, do Ministério de Minas e Energia; e o fornecimento de água para as famílias do semiárido, que deverá ser de responsabilidade do Ministério de Integração Nacional.

Pinassi y Firmino (2013) sostienen que la política agraria de los gobiernos del PT tuvo un carácter esencialmente antipopular y de contra-reforma agraria, una vez que exige al gobierno federal de la responsabilidad de implementar la Reforma Agraria.

¹¹ Traducción propia.

Al delegarla a los gobiernos municipales estuvo más expuesta a las mediaciones clientelares y de cacicazgos entre las fuerzas políticas aliadas a la burguesía agraria. Osorio (2012) destaca que la política neodesarrollista de Lula constituyó un ciclo de expansión del capital transnacional apoyado por el padrón exportador de especialización productiva, un modelo de desarrollo que potencializó el agronegocio, la minería, el sector energético y la construcción civil. En esa línea, es posible observar que, en el ámbito de las políticas públicas de desarrollo rural, el PRONAF desplazó el debate histórico del campesinado sobre la Reforma Agraria, e introdujo, en su lugar, el de la “agricultura familiar”, con el objetivo de vincularla a la lógica de mercado propia del agronegocio. Es decir, prevalece una política agraria estructurada bajo el paradigma del capitalismo agrario y de políticas públicas de subordinación del campesinado.

Otro aspecto de la política de reordenamiento territorial es la reactivación del Programa de Consolidación y Emancipación de los Asentamientos,¹² previsto en el Estatuto de la Tierra de 1964, que originalmente contemplaba la posibilidad de integrar a pequeños productores al mercado interno regulado por el Estado. Dicho programa tiene por objetivo otorgar “autonomía” a los asentamientos de reforma agraria, por medio de la concesión de dominio sobre la tierra para áreas consolidadas con más de 10 años. En una interpretación política de la Norma de Ejecución del INCRA núm. 09 (INCRA, 2001), se constata que más bien se trata de un acuerdo, en clave neoliberal, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por medio del cual la reforma agraria se convierte en política de mercado. El debate en torno a la emancipación de los asentamientos se retoma en la agenda política del gobierno de Roussef, evidentemente vinculado a la reestructuración del INCRA: la prerrogativa de excluir a un asentamiento de Reforma Agraria es, precisamente, desvincularlo de la responsabilidad institucional del INCRA, al mismo tiempo que convierte al asentado en “agricultor familiar”, categoría en perfecta consonancia con los fundamentos del paradigma del capitalismo agrario.

Frente a un escenario político de fortalecimiento del pacto conservador con los sectores políticos y económicos vinculados al capital transnacional y a la burguesía agraria, es impactante la discrepancia numérica de la inversión pública en la política agraria bajo las gestiones del PT: según datos del Censo agropecuario (IBGE, 2009), el Plan Safra 2009/2010 destinó al agronegocio 93 mil millones de reales y 15 mil millones a la agricultura campesina. Según Pericás (2017), en el gobierno de Lula la agricultura empresarial vinculada al agronegocio recibió siete veces más recursos públicos que la agricultura familiar, aunque ésta emplee a 80 por ciento, o más, de trabajadores del campo. Los datos citados por Pericás son de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria e ilustran no sólo un crecimiento del *agrobusiness* entre 1990 y 2011, sino también la disminución de áreas destinadas a la producción de alimentos y el incre-

¹² Implementado por Fernando Henrique Cardoso en el año 2000.

mento de aquellas destinadas a la producción de azúcar (122 por ciento) y de soya (107 por ciento).

En 2015, la política de ajuste fiscal anunció un recorte, especialmente en el MEC (19 por ciento) y el MDA (49 por ciento), ambos responsables de la Política Nacional de Educación del Campo y del PRONERA, respectivamente. En el gobierno de Roussef fue evidente el retroceso en el ámbito de la política agraria en la perspectiva del campesinado brasileño y se agudizó la tensión con el bloque democrático-popular, principalmente con los movimientos sociales campesinos representados por el MST y LVC. Se agudizaba la crisis política y la coyuntura señalaba un nuevo embate en la disputa hegemónica, en un escenario que amenazaba a la democracia. Claramente el PT daba señales de una fragilidad institucional, de pérdida de dirección política, sobre todo en la esfera de la gobernabilidad, lo que evidenciaba la *crisis* o el colapso de la estrategia de conciliación de clases. El vaciamiento ideológico del proyecto democrático –ideado por la base popular y responsable del ascenso del PT– ponía en jaque a la democracia, al mismo tiempo que expresaba el desperdicio de una oportunidad histórica para la consolidación de un proyecto político popular.

Como si no bastara la ruptura político-ideológica del PT con la base democrático-popular, se asecta el golpe político en 2016, con el *impeachment* a Dilma Roussef y el ascenso del vice-presidente –el golpista– Michel Temer a la cabeza del gobierno. Ya como presidente interino, Temer adopta las primeras medidas ofensivas, entre ellas, el cierre del MDA y del Ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial y de los Derechos Humanos. Cobra particular importancia la avidez del gobierno golpista y de los sectores conservadores por implementar medidas provisorias y reformas políticas que atentan contra los principios del debate democrático, de la gestión pública y de los derechos de la clase trabajadora. Enumeraré algunos de los más emblemáticos, como la aprobación en 2016 de la Propuesta de Enmienda Constitucional referente a los gastos del gobierno federal –conocida como PEC 55, PEC 241, o PEC del Techo de los Gastos Públicos– que congela por dos décadas las inversiones públicas, sobre todo aquellas destinadas a la educación, a la salud y a los derechos laborales, así como proceder a congelar el salario mínimo.

El PRONERA es uno de los programas directamente afectados por la PEC 55. En 2017 su presupuesto de redujo de 30 millones de reales a 9 millones. El Proyecto de Ley Presupuestaria Anual para el año 2018 destina un monto de 3 millones de reales al Programa que tiene 100 cursos aprobados, una cifra que compromete sobremano la continuidad del PRONERA. Otra medida fue la aprobación del Proyecto de Ley 38/2017 relacionado a la Reforma Laboral, que viola flagrantemente los derechos laborales garantizados históricamente por la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), entre ellas, la edad mínima para jubilación, el periodo vacacional, la garantía del salario mínimo y el aguinaldo.

La desaceleración de la Reforma Agraria, en curso desde la etapa anterior, se intensifica aún más en el contexto del golpe político, con el aumento de las inversiones de capital transnacional en los agronegocios, con el fin de fortalecerlos. Ejemplo de ello es la *Pauta Positiva* –Bienio 2016-2017–, documento estratégico elaborado por el FPA y el Instituto Pensar Agro, entregado a Temer en 2016. El documento plantea siete ejes (algunos de ellos con Proyectos de Ley (PL) en trámite): 1. Gobernanza Institucional; 2. Política Agrícola; 3. Derecho de Propiedad y Seguridad Jurídica; 4. Medio Ambiente; 5. Infraestructura y Logística; 6. Defensa Agropecuaria, y 7. Relaciones Laborales. Entre las principales reivindicaciones destaca la legalización del proceso de desnacionalización en Brasil, lo que incide directamente en la estructura de demarcación del territorio indígena, quilombola y en las tierras destinadas a la Reforma Agraria. El PL 4059/12 constituye uno de los principales documentos legales elaborados por el FPA, con el objetivo de aprobar la adquisición de inmuebles rurales por parte de empresas con capital principalmente extranjero.

Es notoria la reconfiguración de lo rural en Brasil durante los gobiernos progresistas y en el contexto del golpe político: la hegemonía del capital transnacional –en alianza con la burguesía agraria– es determinante en la naturaleza de la política agraria y en su carácter subordinado al paradigma del capitalismo agrario. En la actual coyuntura política, la bancada ruralista tiene 41 por ciento de los asientos en el Congreso, con una significativa hegemonía parlamentaria que le permite negociar, tranquilamente, los votos necesarios para avanzar en favor de sus intereses políticos. Ejemplo de ello fue el pacto de apoyo a la continuidad del mandato de Temer: de los 263 votos necesarios para archivar el pedido de *impeachment* de Temer, 129 fueron de los ruralistas. En respuesta al apoyo recibido, Temer redujo la inversión presupuestaria del Programa de Adquisición de Alimentos de 478 millones de reales a 294 millones, con una reducción de las familias atendidas de 91.7 mil a 41.3 mil (Bragon, 2016).

Con respecto a la Reforma Agraria, en 2016 fueron creados tan sólo 26 asentamientos y en 2017 sólo uno, en el estado de Ceará. Otra medida fue la prohibición a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria –adscrita al Ministerio de Salud– de dar cualquier información acerca del registro de agrotóxicos, centralizando el control de estos datos en el Ministerio de Agricultura.

La hegemonía parlamentaria de la bancada de extracción rural incide significativamente en el perfil de los Proyectos de Ley (PL) en trámite o ya aprobados: 313 diputados federales (61 por ciento) tienen un historial de actuación parlamentaria con impacto negativo en la cuestión agraria, territorial y socioambiental. Desde 2014 hay 87 PL que atentan en contra del medio ambiente, de la demarcación de tierras indígenas y en favor de la suspensión de la regulación de tierras homologadas, de la supresión de derechos laborales y de la regulación de los agrotóxicos. Incluso, el presidente de la bancada parlamentaria ruralista es autor de ocho PL, entre ellos, el PL 6442/2016

que regula la vivienda y la alimentación como formas de pago a los trabajadores rurales. Los PL son parte del llamado “paquete del veneno”, por ejemplo el PL 3.200/2015 que pretende abolir la actual Ley de Agrotóxicos. Dicho PL determina el veto del término “agrotóxico” y su sustitución por “fitosanitario”, además de proponer la creación de la Comisión Técnica Nacional Fitosanitaria (CTNFITO). Veamos los datos sistematizados por el Consejo Indígena Misionero (CIMI, 2018):¹³ 57 por ciento de los parlamentarios elegidos recibió donaciones de empresas denunciadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 10 por ciento de empresas denunciadas por imponer trabajo esclavo.

El contexto del golpe a Dilma acarreó pérdidas significativas en el campo democrático y en lo que tiene que ver con la garantía de derechos, además de abrir camino a un posicionamiento estratégico de sectores conservadores y de sesgo fascista en el Congreso Nacional, algo sumamente preocupante ante la inminencia de la instauración de un régimen fascista.

La extrema derecha y el avance del conservadurismo en el contexto del golpe político

De acuerdo con Gramsci (1975), el fascismo está asociado a la crisis de hegemonía de un determinado bloque histórico –las fuerzas progresistas– antes considerado clase dirigente. Es decir, la crisis de dirección política de las fuerzas progresistas y los vacíos de la derecha tradicional son terreno fértil para el ascenso del fascismo. Ello nos permite interpretar la dialéctica de la disputa hegemónica en un contexto de golpe político e identificar qué factores determinan el avance de las fuerzas políticas conservadoras en un escenario propicio a la instauración del fascismo en Brasil.

Entre los sectores conservadores que rápidamente se posicionaron en la disputa político-ideológica, destaca el Movimiento Escuela Sin Partido, creado en 2004, responsable del PL 193/2016, el PL 1411/2015 y el PL 867/2015, que tienen por objetivo eliminar el debate de carácter ideológico en el ambiente escolar y universitario, con la restricción de contenidos y basándose en el argumento de la presunta neutralidad del conocimiento. Entre las figuras políticas que encabezan la postura ideológica de ese movimiento, está el diputado federal y ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, uno de los principales promotores de ideas fascistas. Candidato presidencial en las elecciones de 2018,¹⁴ Bolsonaro menosprecia los derechos humanos, ya que está a favor del uso de la tortura –incluso hace apología de los

¹³ El CIMI es miembro de La Vía Campesina Brasil.

¹⁴ En una encuesta del Instituto Datafolha, realizada en 2017, Lula ocupa el liderazgo en las intenciones de voto con 36 por ciento, en segundo lugar está Bolsonaro con 18 por ciento y en cuarto lugar Alckmin (PSDB), con 7 por ciento.

regímenes dictatoriales–, de la reducción de la edad mínima para poder ser enjuiciado penalmente y del uso de “armamento civil”, además de difundir discursos de odio y de criminalización de las luchas sociales, en especial del MST, y de fomentar permanentemente la misoginia, la cultura de la violación y la homofobia.

Otros grupos con características fascistas también se posicionaron: el grupo Patriota,¹⁵ antes Partido Ecológico Nacional; el Movimiento Brasil Libre (MBL),¹⁶ uno de los principales grupos políticos anti-petistas, responsable de las marchas a favor del *impeachment* a Roussef y organizador de campañas a favor de la prisión de Lula. Proclive a las reformas políticas de Temer, la agenda política del MBL incluye el apoyo al Movimiento Escuela Sin Partido y una narrativa conservadora y misógina.

La arquitectura del golpe político es muy compleja en cuanto a las estrategias utilizadas por las fuerzas políticas de derecha, sea la derecha tradicional de oposición o aquella conservadora de corte fascista. Es de destacar la ausencia de un consenso con respecto a una candidatura para disputar las elecciones presidenciales de 2018, pues cada una tendrá su propio candidato. No obstante, el discurso anti-corrupción y anti-petista es un elemento común de las derechas, lo mismo que las estrategias en el campo legal-jurídico como el *lawfare* (“ataques con la utilización del aparato jurídico y legal como arma”), utilizado para impedir la candidatura presidencial de Lula, con lo que se configuraría la última etapa para consolidar el golpe político.

Los Frentes Populares y la resistencia al golpe político y al fascismo en Brasil

En una entrevista concedida en 2015 al *Jornal Brasil de Fato*, João Pedro Stédile, de la Coordinación Nacional del MST, destaca tres crisis en la actual coyuntura (MST, 2015): 1) la crisis económica, caracterizada por el nulo crecimiento industrial y el desempleo; 2) la crisis social, con la ausencia de derechos básicos y el aumento de la violencia, y 3) la crisis política e institucional, con la pérdida de confianza de la población no sólo en la clase política sino también en la propia concepción de la política electoral burguesa. Stédile destaca que ante el complejo escenario político brasileño, el principal desafío consiste en la articulación de una unidad política entre los movimientos populares y otros sectores de la izquierda brasileña. En sus palabras:

Por parte de los movimientos populares la situación también es compleja. Los movimientos y las fuerzas populares, que engloban a todas las formas organizativas – como partidos, sindicatos, movimientos sociales, pastorales, etcétera–, no han tenido

¹⁵ Este último es responsable por la difusión de videos de corte fascista y de aproximación con la ideología neonazi.

¹⁶ Fundado en 2014 en São Paulo, constituye un brazo de la extrema derecha conservadora y apoya el liberalismo económico y el republicanismo.

la capacidad de organizar una plataforma común, un programa unitario de salida de la crisis [...] Es necesario construir un programa que unifique a todos los sectores sociales y brinde unidad a las acciones de movilizaciones de masa (MST, 2015).

Con respecto al posicionamiento de la base democrático-popular, añade:

Estamos haciendo todos los esfuerzos para construir plenarias unitarias entre todos los frentes de masa, sobre todo en los estados, y estimular a los sectores organizados a luchar. [...] Vemos la posibilidad de construir dos espacios complementarios de frentes, de unidad. Un frente de lucha de masas, que la CUT y los movimientos populares articulan [...] Y otro frente político que logre aglutinar a los movimientos populares, partidos, entidades, pastorales e intelectuales para debatir un proyecto para Brasil. Es decir, un frente que ni es partidario ni electoral. Es un frente político para pensar el futuro y tener un proyecto alternativo al de la burguesía (MST, 2015).

Frente al quiebre de los mecanismos institucionales para el ejercicio de la democracia, por un lado, y el ascenso de la derecha conservadora fascista, por el otro, el bloque democrático-popular se encuentra en una encrucijada política, dado que parte de la crisis actual es consecuencia de la estrategia política de conciliación de clases del PT. Aún más, las medidas de austeridad y de contención de la Reforma Agraria Popular y de la Política Nacional de Educación del Campo comenzaron antes del (re)ascenso de las derechas, bajo la “era PT”. Es decir, en ese periodo se sentaron las bases para el regreso de la derecha, por no resolver las contradicciones estructurales y políticas del país, además de proporcionar a la burguesía agraria y al capital financiero niveles extraordinarios de acceso a las zonas rurales y a los programas de gobierno. En ese sentido, el gobierno golpista de Temer retoma e intensifica el paquete político anterior, gracias a la hegemonía consolidada del capital transnacional, las oligarquías nacionales y la burguesía agraria en los territorios rurales.

Una de las estrategias articuladas por el MST y otras organizaciones populares y sindicales para enfrentar el golpe y el avance de la derecha conservadora fascista consistió en recuperar la experiencia del Frente Popular.¹⁷ Existen tres grandes frentes que articulan agendas políticas permanentes para avanzar en el análisis coyuntural de los dilemas de la democracia brasileña en el contexto del golpe, en la denuncia del Estado de excepción y contra el fascismo. Si bien los dos primeros frentes manifiestan apoyo político al PT, no hay un consenso con respecto a la candidatura de Lula para las elecciones de 2018. Por lo tanto, el debate político interno aún continúa en busca de unidad política.

En primer lugar está el Frente Brasil Popular, conformado por 66 organizaciones populares, sindicales y de movimientos sociales, intelectuales, periodistas, partidos y

¹⁷ Predominante a lo largo de la década de 1930, época de ascenso del fascismo.

corrientes partidarias, entre ellas el PT, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialista Brasileño, el Partido de la Causa Obrera, el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Partido Democrático Trabalhista y, para colmo, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido del golpe.

En segundo lugar, tenemos al Frente Nacional de Movilización Pueblo Sin Miedo, conformado por 27 entidades sindicales, juveniles, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y el Partido Socialismo y Libertad.

Y por último, el Frente de la Izquierda Socialista, conformado por intelectuales, estudiantes y otros colectivos urbanos. En el centro del debate articulado por este frente está la urgencia de fortalecer el bloque de la izquierda popular, más allá del “Lulismo” y de las elecciones de 2018.

El MST juega un importante papel articulador dentro del Frente Brasil Popular. Muy consciente de la derrota que ha sufrido el proyecto de la Reforma Agraria Popular, el Movimiento realizó un balance interno, donde destaca los desafíos de fondo para que prevalezca la coherencia entre sus principios organizativos y políticos. Entre los desafíos de carácter interno destacan (MST, 2017): la burocratización del MST; el predominio de la lucha económica sobre la lucha política; el desafío de dinamizar estructuras organizativas y/o masificar las acciones de lucha. Otros desafíos son (MST, 2017): construir la unidad popular y una nueva estrategia política para la clase trabajadora; retomar el trabajo de formación de base para fortalecer la organización de la clase trabajadora en el campo y en la ciudad; desarrollar procesos de formación política para ampliar y fortalecer los cuadros políticos y organizativos; construir la solidaridad de clase; reivindicar la Reforma Agraria Popular como proyecto político del campesinado brasileño.

Como ya se dijo, el proyecto de la Reforma Agraria Popular no depende únicamente de la *praxis* política del MST y del conjunto de las organizaciones campesinas de Brasil. En décadas pasadas, los movimientos sociales tuvieron un protagonismo político más orgánico frente a la política neoliberal. No obstante, en el ciclo progresista hubo una yuxtaposición de la agenda política que jerarquizó la relación gobierno-movimientos. En el campo social, la “era PT” no modificó la distribución de la renta y promovió una relación clientelar con los sectores más vulnerables, lo que conllevó a una paulatina desmovilización social. El PT llegó al poder también con el apoyo de la fracción reaccionaria de la burguesía agraria y de sus políticos tradicionales, oligarcas históricos que construyeron su patrimonio económico y político a costa de la expropiación territorial del campesinado, de los pueblos indígenas luego de 380 años de esclavitud, raíces de la formación social y político-económica de Brasil que prevalecen en la cultura política de las élites agrarias.

El apoyo o no al PT y a Lula ha sido la mayor disyuntiva enfrentada por el MST, sobre todo porque tiene claro lo que ha representado la “era PT” en el fortalecimiento del capital transnacional en el campo y en la hegemonía de la burguesía agraria por la vía de la bancada parlamentaria ruralista. No obstante, los vientos del fascismo soplan y cada vez con más fuerza, en una tendencia que no se limita al contexto brasileño, dado que estamos ante un retorno de las derechas a escala internacional. El reposicionamiento de las derechas encuentra terreno favorable en las contradicciones y crisis de dirección política de los gobiernos progresistas latinoamericanos –con notoriedad en su estrategia de pactos conservadores– precisamente por la imposibilidad de diálogo entre clases antagónicas. La presencia de una derecha fascista oportunista obliga a los movimientos sociales a posicionarse en favor de los gobiernos progresistas aunque la confluencia política se limite únicamente a la defensa de la democracia frente a la amenaza de un régimen fascista.

Esta situación plantea un escenario complejo para el MST y demás movimientos campesinos: si participar dentro de frentes populares en contra del golpe y del fascismo, o caer en la contradicción de apoyar el retorno al poder de los mismos actores que montaron el escenario para el (re)ascenso de las derechas, viejas y nuevas. Esto no dista mucho de las contradicciones presentes de manera más general en América Latina bajo los gobiernos de la izquierda progresista.

Reflexiones finales

Florestan Fernandes (2008) advirtió que cualquier perspectiva de desarrollo brasileño se topará necesariamente con intereses de clases. A lo largo de la historia de Brasil, la ausencia de procesos revolucionarios –sea de independencia, una revolución burguesa o una revolución popular– acentuó la supremacía de los intereses de clase de determinado círculo social, conllevando a procesos de adaptación a la estructura y a la dinámica del poder.

Históricamente, el Estado brasileño ha tenido el papel de sustituir a las clases sociales con potencial de dirección política, centrando en sí la tarea de regular la agenda política de las clases económicamente dominantes, es decir, ha tenido una función de dominio y no de dirección política (Coutinho, 2000). Las transformaciones siempre han sido resultado de un desplazamiento de la función hegemónica de una a otra clase dominante, oscilantes en los diferentes periodos históricos, aunque siempre complementarias en sus alianzas políticas. En ese sentido, correspondió al Estado la tarea de controlar a los sectores populares, en lo que Gramsci (1975) traduce como *revolución pasiva*, que presupone el fortalecimiento del Estado en favor de las fuerzas hegemónicas y el ejercicio del “transformismo” como modalidad de desarrollo histórico que excluye –como condición *sine qua non*– a las masas populares.

Otro aspecto de la lucha de clases en Brasil es que el enfrentamiento se da entre fuerzas políticas de dirección burguesa y fuerzas de carácter conservador en sintonía con los intereses de la burguesía local y del capital transnacional. En ese contexto, la lucha de clases se da por una vía institucional dada la ausencia de una fuerza política de carácter popular con capacidad de disputar el Estado. Precisamente aquí reside el gran límite de una política de conciliación de clases, ya que no es suficiente con tomar el poder, también es necesario promover una transformación radical de los mecanismos de reproducción de la hegemonía burguesa.

El MST (2017) reconoce que en la “era PT” se consolida una hegemonía de clase, de alianza con la burguesía agraria y el paradigma del capitalismo agrario. En el documento debatido en su 18º Encuentro Nacional se afirma:

El MST quedó de “manos atadas” ante esas contradicciones de un gobierno que apoyamos para que llegara al poder [...] En la práctica, intentamos resistir consolidando nuestra fuerza social en otras áreas, como educación, agroecología, agroindustrias, políticas públicas, pero sin fuerzas para enfrentar el agronegocio como modelo y como proyecto de clase (MST, 2017:41).¹⁸

A propósito del repliegue político de la base popular, Stédile analiza:

En Brasil, desde 1989 hubo un repliegue de las masas luego de la derrota de la clase trabajadora en su proyecto democrático popular. La última gran huelga en el país fue en 1988, la última gran conquista que tuvimos fue la Constitución de 1988. Con la derrota [electoral] de 1989, cuando de hecho afloró el neoliberalismo, y la burguesía se volvió hegemónica en la sociedad brasileña, la clase trabajadora se replegó y defendió su sobrevivencia. El campesinado y las fuerzas populares del campo, como no estaban vinculadas a la lucha directa por el empleo, continuaron la movilización hasta 2005. Entonces, la clase trabajadora como un todo se replegó, pero los campesinos no. Nosotros, del MST, de 1997 a 2005, asumimos un protagonismo de lucha contra el neoliberalismo que no esperábamos, porque continuamos movilizándonos y los otros no. De 2005 para acá, fruto de todo ese proceso de lucha, los campesinos también se replegaron, y nosotros del MST juntos, como parte de esa ola histórica de repliegue (Fachin y Gallas, 2014).

En el actual escenario político no hay consenso con respecto al sendero que se debe elegir frente a la encrucijada política en que nos encontramos. Lo cierto es que la crisis de dirección política favorece a la derecha conservadora fascista, como lo revela la segunda posición de Bolsonaro en las intenciones de voto.

Ante la posibilidad de que triunfe un candidato fascista, la opción del MST y del conjunto de los movimientos campesinos es apoyar la candidatura de Lula en 2018,

¹⁸ Traducción propia.

pese a las profundas contradicciones políticas y éticas del PT. No obstante, más que limitarse a un proceso electoral, es fundamental para el MST y el conjunto de organizaciones del bloque democrático-popular debatir, con paciencia histórica, las tácticas y las estrategias para enfrentar situaciones inéditas, o un retroceso político de recrudescimiento del Estado que instaure un régimen autoritario fascista. Estos son desafíos que superan los parámetros teóricos, ya que más bien reflejan la urgencia de repensar hasta qué punto es viable una disputa hegemónica en un Estado burgués. En otras palabras, es urgente analizar la relación con los partidos y los gobiernos nacidos de la base popular, pero incapaces de destruir los pilares que sostienen la institucionalidad burguesa.

En este momento de la historia política de Brasil no hay una respuesta conclusiva –y coherente desde la perspectiva de la decisión tomada por los movimientos campesinos– con respecto al escenario político brasileño. Más bien me propuse plantear algunos elementos –en una perspectiva de sistematización del movimiento pendular de una política de conciliación de clases– como ejercicio para ver que, en efecto, la consolidación de la democracia no se limita a un proceso electoral. La construcción de la democracia está más allá del Estado burgués, que en nuestros días se presenta como Estado transnacional capitalista.

Bibliohemerografía

- AVRITZER, Leonardo (2016), *Impasses da democracia no Brasil*, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- BANCO MUNDIAL (s/f), “Programa de inclusión financiera”, en *Banco Mundial*. Dirección URL: <<http://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview>>.
- BARBOSA PINHEIRO, Lia (2013), “Por la democratización de la Educación Superior en Brasil: el PRONERA en el marco de la lucha de los movimientos sociales campesinos”, en *Revista Universidades*, México, UDUAL, núm. 53, abril-junio.
- BARBOSA PINHEIRO, Lia (2015), “Educação do Campo, movimentos sociais e a luta pela democratização da Educação Superior: os desafios da universidade pública no Brasil”, en Adrián ACOSTA SILVA *et al.*, *Los desafíos de la universidad pública en América Latina y el Caribe*, Buenos Aires, CLACSO.
- BARBOSA PINHEIRO, Lia (2016a), “Educação do Campo [Education for and by de countryside as a political project in the context of the struggle for land in Brazil]”, en *The Journal of Peasant Studies*, vol. 44, núm. 1.
- BARBOSA PINHEIRO, Lia (2016b), “Brasil. La disputa de proyectos políticos en el siglo XXI”, en Lucio OLIVER (coordinador), *Transformaciones recientes del Estado integral en América Latina. Críticas y aproximaciones desde la sociología política de Antonio Gramsci*, México, UNAM/La Biblioteca Editorial.
- BRAGON, Ranier (2016), “Orçamento de Temer corta verba para reforma agrária”,

en *Folha de São Paulo*, 1 de noviembre. Dirección URL: <<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1818845-orcamento-de-temer-corta-verba-para-reforma-agraria.shtml>>.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) (2001), *Norma de Ejecución del INCRA*, núm. 09, Brasília, Brasil.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL) (2013), *Panorama Social de América Latina*, Santiago de Chile, Naciones Unidas.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI) (2018), “Em cada 10 deputados federais, 6 têm atuação desfavorável ao meio ambiente, indígenas e trabalhadores rurais”, en *Conselho Indigenista Missionário*. Dirección URL: <<https://www.cimi.org.br/2018/02/em-cada-10-deputados-federais-6-tem-atuacao-desfavoravel-ao-meio-ambiente-indigenas-e-trabalhadores-rurais/>>.

COUTINHO NELSON, Carlos (2000), “El concepto de sociedad civil en Gramsci y la lucha ideológica en el Brasil de hoy”, en Dora KANOSSI (compiladora), *Gramsci en América Latina: II Conferencia Internacional de Estudios Gramscianos*, México, Plaza y Valdés.

FACHIN, Patrícia y Luciano GALLAS (2014), “Está em curso uma concentração da propriedade da terra, diz Stédile”, en *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*. Dirección URL: <<http://www.mst.org.br/2014/05/16/esta-em-curso-uma-concentracao-da-propriedade-da-terra-diz-stedile.html>>.

FERNANDES MANÇANO, Bernardo (2008), “Reforma Agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial”, en Antônio MARCOS BUAIANIN (coord.), *Luta pela terra, Reforma Agrária e gestão de conflitos no Brasil*, Campinas, Editora UNICAMP.

FERNANDES MANÇANO, Bernardo (2015), “Políticas públicas, questão agrária e desenvolvimento territorial rural no Brasil”, en Catia GRISA y Sergio SCHNEIDER (organizadores), *Políticas públicas e desenvolvimento rural no Brasil*, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

FERNANDES, Florestan (2008), *Mudanças sociais no Brasil*, São Paulo, Editora Global.

GRAMSCI, Antonio (1975), *Quaderni del Carcere*, Roma, Einaudi.

HARVEY, David (2004), *O “novo” imperialismo: acumulação por espoliação*, Buenos Aires, CLACSO/Socialist Register.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (2009), “Censo Agropecuario 2006”, en *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*. Dirección URL: <<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/default.shtm>>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (2010), “Censo 2010”, en *Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*. Dirección URL: <<https://censo2010.ibge.gov.br/>>.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÓMICA APLICADA (IPEA) (2015), *Relatório da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária*, Brasília.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (2016), “O que o governo Dilma fez (e não fez) pela reforma agrária?”, en *Instituto Socioambiental*. Dirección URL: <<https://www.socioam>

- biental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-o-governo-dilma-fez-e-nao-fez-pela-reforma-agraria>.
- LAVINAS, Lena (2013), “21st Century Welfare”, en *New Left Review*, núm. 84, noviembre-diciembre. Dirección URL: <<https://newleftreview.org/II/84/lena-lavinas-21st-century-welfare>>.
- LAVINAS, Lena *et al.* (2017), “Brasil: vanguarda da financeirização entre os países emergentes? Uma análise exploratória”, Texto para discussão 32, Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- MACHADO, Darío y Raúl ZIBECCHI (2017), *Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*, México, Bajo Tierra.
- MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) (2013), *Programa Agrário do MST*, São Paulo, Secretaria Nacional do MST.
- MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) (2014), *Orientações políticas e práticas para os delegados do VI Congresso Nacional do MST*, São Paulo, Secretaria Nacional do MST.
- MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) (2015), “Precisamos criar uma frente política que pense o futuro e tenha um projeto alternativo ao da burguesia, diz Stédile”, en *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*. Dirección URL: <<http://www.mst.org.br/2015/07/06/precisamos-criar-uma-frente-politica-que-pense-o-futuro-e-tenha-um-projeto-alternativo-ao-da-burguesia-diz-stedile.html>>.
- MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) (2017), “Debates em preparação ao 18º Encontro Nacional do MST”, en *Cadernos de Formação*, São Paulo, Secretaria Nacional do MST, núm. 42.
- OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (2001), “A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e reforma agrária”, en *Estudos Avançados*, vol. 15, núm. 43, septiembre-diciembre.
- OSORIO, Jaime (2012). “América Latina: o novo padrão exportador de especialização produtiva”, en Carla FERREIRA *et al.* (organizadores), *Padrão de reprodução do capital: contribuição da teoria marxista da dependência*, São Paulo, Boitempo.
- PALLEY, Thomas (2007), *Financialization: what it is and why it matters. The Levy Economics Institute and Economics for Democratic and Open Societies*, Working Paper, núm. 525, Washington D. C.
- PERICÁS, Luiz Bernardo (2017), “Monopólios, desnacionalização e violência: a questão agrária no Brasil hoje”, en *Margem Esquerda*, núm. 29.
- PINASSI, Maria Orlanda y Frederico DAIA FIRMINO (2013), “O MST, a reforma agrária e o neodesenvolvimentismo”, en *Gilson Sampaio*, 16 de septiembre. Dirección URL: <<http://gilsonsampaio.blogspot.com.br/2013/09/o-mst-reforma-agraria-e-o.html>>.
- PRAZERES, Leandro (2015), “No governo Dilma, reforma agrária tem pior ritmo em 20 anos”, en *UOL Notícias*, 8 de enero. Dirección URL: <<https://noticias.>

uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/01/08/no-governo-dilma-reforma-agraria-tem-pior-ritmo-em-20-anos.htm>.

SINGER, André (2012), *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*, São Paulo, Companhia das Letras.

ZIBECHI, Raúl (2010), *Contraingurgencia y miseria: las políticas de combate a la pobreza en América Latina*, México, Pez en el Árbol.

Recibido: 17 de noviembre de 2017

Aprobado: 20 de abril de 2018